

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

<b>Demandante</b>	OLGA CECILIA VARGAS URIBE
<b>Demandado</b>	BRILLADORA ESMERALDA LTDA. LIQUIDADA Y DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
<b>Tipo de proceso</b>	Ordinario
<b>Radicado Nacional</b>	05-001-31-05-019-2017-00611-01
<b>Instancia</b>	Segunda
<b>Providencia</b>	Interlocutorio Nro. 018 de 2023
<b>Tema y subtema</b>	Apelación auto que excluye a la demandada Brilladora Esmeralda Ltda. ante su liquidación
<b>Decisión</b>	Confirma

Medellín, treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas María Eugenia Gómez Velásquez, Claudia Angélica Martínez Castillo y Luz Amparo Gómez Aristizábal, entra a resolver recurso de apelación contra el auto del 12 de diciembre del año 2022, proferido por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral promovido por **Olga Cecilia Vargas Uribe**, contra **Brilladora Esmeralda Ltda. Liquidada y el Departamento de Antioquia**. Radicado número 05001 3105 **019 2017 00611** 01.

Antecedentes

Para lo que interesa a esta instancia se tiene que, en la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T y de la S.S, el juez de conocimiento, en la etapa

de saneamiento dispuso excluir de la Litis a la codemandada Brilladora Esmeralda Ltda., en la medida que al verificar el estado de la persona jurídica para el momento en que se dio la notificación del auto admisorio de la demanda ésta ya se encontraba liquidada.

2

Advirtió que la notificación de tal proveído vía correo electrónico se efectuó el 22 de abril de 2022, sin que se hubiese recibido respuesta o confirmación de la recepción del mensaje, por lo cual, el despacho se encargó de indagar respecto del estado de la persona jurídica de derecho privado demandada, obteniéndose el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Cali, donde se constató que, por AUTO No. 406-009453 del 31 de octubre de 2019, inscrito en esa entidad el 28 de noviembre de 2019, con el No. 145 del Libro XIX, la Superintendencia de Sociedades, decretó la terminación de la liquidación judicial, es decir, la codemandada desapareció del mundo jurídico.

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de la accionante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación indicando que se debía tener en cuenta que la acción fue interpuesta en el mes de julio de 2017 y admitida en ese mismo año, es decir, que la sociedad existía al momento de la presentación de la demanda, era una persona jurídicamente plena y capaz, pero su vida jurídica finalizó el 31 de octubre de 2019, por lo que es aplicable el art 245 del C. Co, que establece la reserva que debe tener el liquidador, la cual se traduce en un valor a cargo de éste, con el cual debe asumir las obligaciones condicionales o en litigio en cabeza de la persona liquidada.

Agrega que, cuando en el transcurso del proceso laboral deviene la extinción de la persona jurídica, conforme al artículo 68 del CGP, los sucesores podrán comparecer y en todo caso la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurren, luego es desacertada la decisión de excluir a Brilladora

Esmeralda por haber fenecido como persona jurídica, ya que aun después de la liquidación están los mecanismos legales para que se puedan garantizar obligaciones, por lo que retirarla del trámite constituye una vulneración de los derechos laborales del trabajador, quien tiene que asumir la carga de extinción de la empresa que incumplió sus compromisos laborales, protegidos por el art 59 de la Constitución Nacional.

Seguidamente expone que en el acto liquidatorio de Brilladora Esmeralda, se estableció un fideicomiso a nombre del liquidador, con un patrimonio suficiente para pagarle a los acreedores, y en dicho auto de liquidación se estableció que el señor Jorge Enrique Gálvez sería la persona que iba a administrar ese patrimonio, y de acuerdo con el Código de Comercio, la reserva se crea para cubrir estos derechos litigiosos, aunado a que, en dicho auto de liquidación aparece el correo electrónico en el cual se le debe notificar al liquidador de la sociedad extinta, por lo que desconocer esta situación regulada en el Código de Comercio, desecha los derechos de su poderdante, por lo que solicitó al despacho, o en subsidio al Tribunal, revocar la decisión y notificar al correo del liquidador, para continuar con el proceso, al ser un litisconsorcio necesario, máxime que, el hecho de que no concurren los socios de la extinta empresa no significa que la sentencia no tenga efecto frente a ellos.

El juez de la causa mantuvo su decisión, y al encontrar debidamente sustentado el recurso lo remite ante esta Corporación.

**Del traslado para alegar hizo uso, la apoderada del departamento de Antioquia,** solicita confirmar la decisión primigenia, en la medida que es coherente racional y acorde con la normativa y jurisprudencia vigente para la época.

Por su parte, **la apoderada judicial de la demandante** insiste en los argumentos para la no exclusión de Brilladora Esmeralda Ltda. del trámite, y explica ampliamente porque no opera el fenómeno extintivo de la prescripción, y las razones por las que se debe imponer condena solidaria al Dpto. de Antioquia.

En orden a decidir, basten las siguientes,

### **Consideraciones**

Teniendo en cuenta la providencia atacada y la argumentación de la parte recurrente, habrá de establecerse si es procedente excluir del presente trámite a la sociedad Brilladora Esmeralda Ltda., al encontrarse liquidada, como lo determinó la primera instancia, o si por el contrario, el proceso debe continuar con el liquidador de la pasiva tal como lo pretende la apelante.

Pues bien, antes de resolver la instancia, se considera necesario precisar, el siguiente aspecto:

### **De la capacidad para ser parte.**

El artículo 53 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 145 del estatuto procesal laboral, establece que tienen la capacidad de ser partes, las personas naturales y jurídicas, quienes pueden comparecer a juicio bien sea en condición de demandante o demandado. El artículo 54 del mismo estatuto indica que lo deberá hacer por medio de sus representantes, con arreglo a lo que disponga la Constitución, la ley o los estatutos. Añadiendo que, cuando la persona jurídica se encuentre en estado de liquidación deberá ser representada por su liquidador.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia hace la distinción entre la capacidad para ser parte y la para comparecer a un proceso judicial. En sentencia SL676-2021 indicó:

*“Es oportuno destacar que la capacidad para ser parte difiere de la capacidad para comparecer al proceso. La primera se refiere a los sujetos que tienen personalidad jurídica y con vocación legítima para adquirir derechos y obligaciones, y si bien se presume para todas las personas humanas, debe acreditarse cuando se trata de otro tipo de actores. En términos de un proceso judicial, es la facultad que una persona o ente tiene para ser sujeto de relaciones jurídicas.*

*La segunda, en cambio, refiere a la facultad de disponer de los derechos y responder por las obligaciones. Es la capacidad para intervenir en un proceso por sí mismo y sin que medie representación o autorización de otros. Se presume en todas las personas naturales que han alcanzado la mayoría de edad, pero en tratándose de personas jurídicas, incapaces u otros entes habilitados por la ley para ser parte en el proceso, es necesario que acudan por intermedio de sus representantes legales, tutores, albaceas, gestores, etc. (CSJ SL, 22 jul. 2009, rad. 27975 y CSJ SL, 1 feb. 2011, rad. 30437).”*

Frente a las sociedades en liquidación, la Ley 1116 de 2006 “*Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones*”, prevé la designación de un promotor en los procesos de reorganización empresarial, y un liquidador en los de liquidación por adjudicación y judicial, quien representará a la Sociedad en todos los trámites administrativos y judiciales, por lo tanto, mientras se encuentre vigente el trámite de liquidación la persona jurídica todavía tiene capacidad de ser parte.

Y una vez liquidada, la sociedad deja de ser sujeto de derechos y obligaciones, pues con la terminación del proceso liquidatorio, se extingue la personería jurídica y es cancelada su matrícula mercantil. En ese sentido entonces deja de contar con capacidad jurídica, así lo adoctrinó el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, en sentencia del 29 de octubre de 2020, dentro de la Radicación: 50001-23-33-000-2016-00916-01 (24365). En lo que aquí nos concierne precisa:

*"En cuanto a la capacidad de las personas jurídicas para ser parte en el proceso, esta Sección precisó que este atributo se conserva hasta que se liquide la entidad y se inscriba en el registro mercantil la cuenta final de su liquidación, en los siguientes términos:*

***"... la capacidad para actuar se extingue con la inscripción de la cuenta final de la liquidación en el registro mercantil y, a partir de ese momento, las personas jurídicas desaparecen del mundo jurídico, no pueden ser sujeto de derechos y obligaciones, y no pueden ser parte de un proceso" [Se destaca].***

*Lo anterior permite afirmar que las personas jurídicas conservan su capacidad procesal para ser parte mientras existan, esto es, desde su constitución legal hasta el momento de su liquidación y que la cuenta final presentada por el liquidador quede inscrita en el registro mercantil. Registrada la liquidación, la sociedad deja de ser sujeto de derechos y obligaciones, por ende, no puede ser parte en un proceso<sup>1</sup>.*

Así mismo, frente a la responsabilidad del liquidador al terminar el trámite de liquidación, el artículo 255 del Código de Comercio en su tenor literal dispone: *"Los liquidadores serán responsables ante los asociados y ante terceros por los perjuicios que se les cause por violación o negligencia en el cumplimiento de sus deberes"*.

La misma Corporación Sección Cuarta, en providencia del 4 de abril de 2019, dentro de la Radicación No 68001-23-31-000-2003-00568-01(18729) consejero ponente, Milton Chaves García, señaló:

*"En cuanto a la responsabilidad del liquidador de una sociedad, la Sala en oportunidad anterior precisó lo siguiente<sup>2</sup>:*

***"... el liquidador de una sociedad que ya se liquidó solo responde por los perjuicios causados por el incumplimiento de sus deberes, para lo cual el artículo 255 del Código de Comercio prevé que las acciones de los terceros (y los asociados) contra los liquidadores prescriben en cinco años, a partir de la fecha de la aprobación de la cuenta final de la liquidación.***

*"Al respecto, la doctrina ha dicho que 'a partir de la aprobación de la cuenta final de liquidación no subsisten sino acciones de los asociados y de los terceros contra el liquidador; ya no se trata de acciones contra la*

<sup>1</sup> Sentencia de 7 de marzo de 2018, Exp. 23128, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

<sup>2</sup> Sentencia de 23 de junio de 2015, Exp. 20688, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

sociedad que puedan seguirse contra el liquidador como administrador de ese patrimonio social, sino de acciones derivadas de la obligación interpuesta en el artículo 255 del Código al liquidador de responder por los perjuicios causados a los socios y a los terceros 'por violación o negligencia en el cumplimiento de sus deberes'.<sup>3</sup> (Subraya la Sala)

"A su vez, **la efectividad de los derechos de los terceros contra el liquidador por actos de la sociedad solamente pueden intentarse durante el período de la liquidación**, pues 'clausurada esta con la aprobación de la cuenta final de la misma, no hay propiamente obligaciones sociales, ya que desde entonces deja de existir el patrimonio social'<sup>4</sup>.

"En consecuencia, 'Si no han sido pagadas todas las obligaciones, ya no es posible intentar su cobro, la acción procedente entonces, tanto de parte de los socios como de los terceros, es la indemnización de perjuicios que representa para ellos el no pago, **si es debido a dolo o culpa del liquidador en el cumplimiento de sus funciones**. [...] Son, pues, dos clases muy distintas de acciones las que pueden intentar los socios y los terceros contra un liquidador: **las enderezadas directamente a obtener el pago de los créditos de que sean titulares contra la sociedad, que solamente pueden proponerse como tales durante la liquidación**, y las enderezadas al pago de los perjuicios causados por no haber sido atendidos debidamente los créditos'<sup>5</sup>.

**"En suma, una sociedad liquidada no es sujeto de derechos y obligaciones y por tratarse de una persona jurídica que ya no existe, tampoco puede demandar ni ser demandada<sup>6</sup>. Por la misma razón, el liquidador no tiene su representación legal ni pueden exigírsele a este el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la sociedad liquidada". (resaltos fuera del texto)**

Luego, conforme a las reflexiones anteriores, en el caso concreto se tiene que debido a la inexistencia de la persona jurídica en comento, el juez de conocimiento resolvió excluirla, decisión a la que se opone la apoderada de la parte demandante, quien, según la sustentación del recurso, entiende la Sala, pretende se continúe con el trámite respecto a la sociedad liquidada, a través de su liquidador o socios.

<sup>3</sup> *Sociedades Comerciales Vol. 1. Teoría General*. Gabino Pinzón. Quinta Edición. Editorial TEMIS S.A. 1988, pág. 263.

<sup>4</sup> *Ibídem*

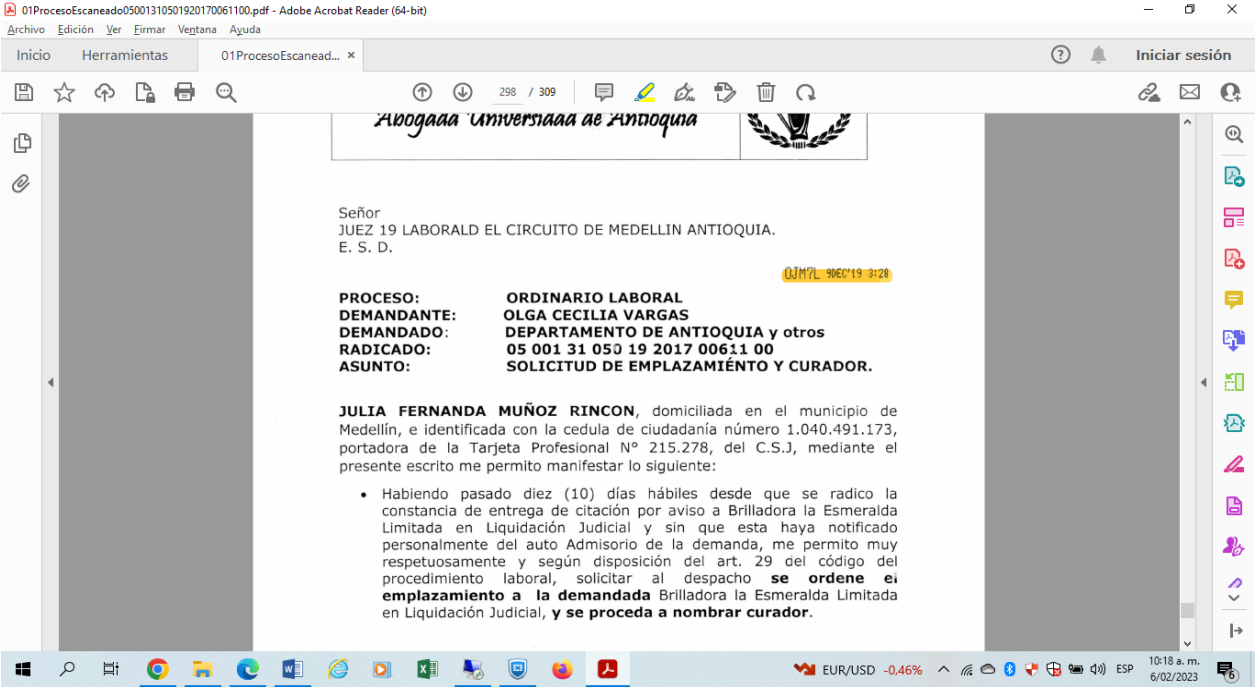
<sup>5</sup> *Ibídem*

<sup>6</sup> *Ibídem*. Se reitera que en oficio 220-036327 de 21 de mayo de 2008, la Superintendencia de Sociedades precisó que "al ser inscrita la cuenta final de liquidación en el registro mercantil, se extingue la vida jurídica de la sociedad, **por tanto, mal podría ser parte dentro de un proceso una persona jurídica que no existe**" (Se resalta).

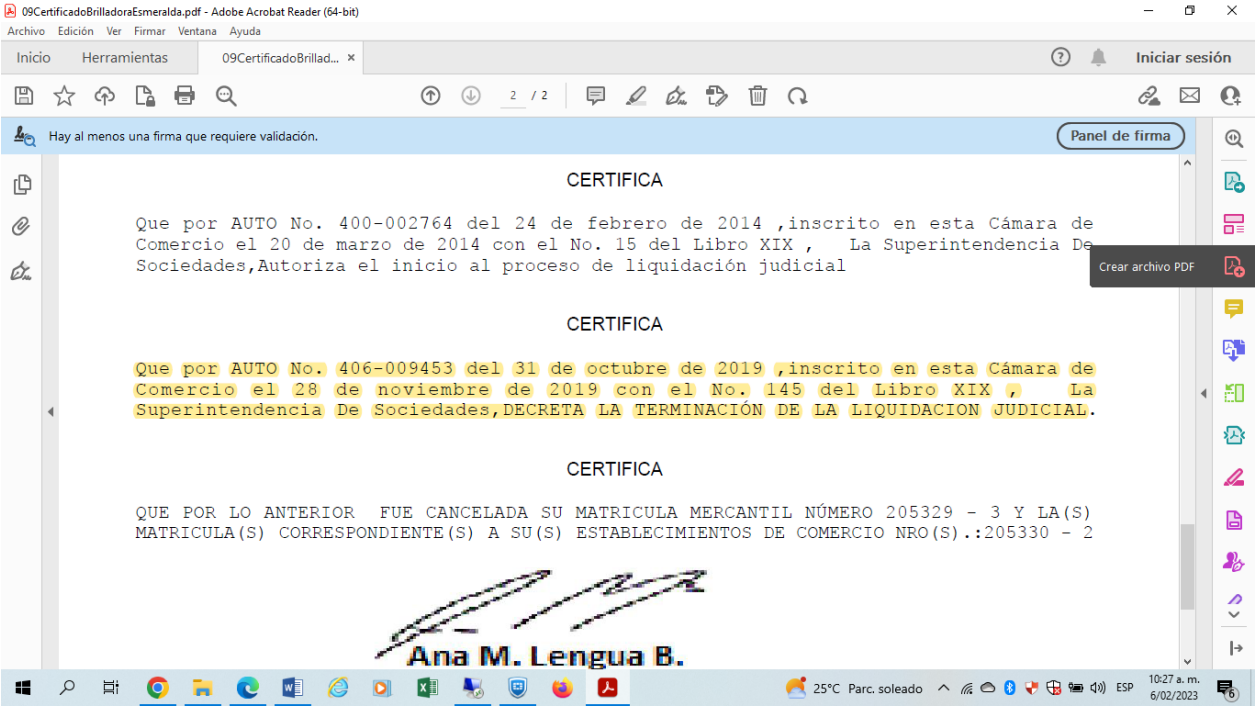


No existe duda, conforme al certificado de existencia y representación legal expedido el 8 de diciembre del año 2022, obrante en el archivo digital N° 09 pdf, que por auto número 400-002764 del 24 de febrero de 2014, expedido por la Superintendencia de Sociedades, registrado en la Cámara de Comercio de Cali bajo el número 15 del libro XIX del registro mercantil, el 20 de marzo de 2014, fue inscrita la apertura de la liquidación judicial de la sociedad BRILLADORA ESMERALDA LIMITADA y que mediante auto número 406-009453 del 31 de octubre de 2019 de la misma superintendencia, asentado bajo el número 145 del libro XIX del registro mercantil, **el 28 de noviembre del año 2019**, fue inscrita la terminación de la liquidación judicial, con anotación **en la misma fecha de la CANCELACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA POR TERMINACIÓN DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL**. Ahora, si bien es cierto para el momento en que se admitió la acción ordinaria, 18 de agosto de 2017 (archivo 01. Proceso Escaneado, pág. 135), la persona jurídica demandada todavía tenía capacidad de ser parte, y para contraer derechos y obligaciones, **también lo es que la notificación de tal proveído no se llevó a cabo antes de que la pasiva dejara de existir**, y es que nótese como desde la presentación de la demanda, ya era conocido por la parte interesada que la sociedad se encontraba en proceso de liquidación, y si bien inicialmente la apoderada de la accionante realizó una primera citación, siete meses después del auto de admisión, **el 27 de marzo de 2018**, a la oficina del liquidador, carrera 4 N° 9-60 PISO 14 - CALI – VALLE, (archivo 01. Proceso Escaneado, folio.174), y al no recibir respuesta, **el 15 de agosto del mismo año** envió notificación por aviso, sin que para aquel momento, pese a haber sido recibido en aquella dirección, se hubiese obtenido respuesta, y posterior a ello, sólo **16 meses después, el 9 de diciembre de 2019, solicitó el emplazamiento y el respectivo nombramiento de curador**, como se aprecia en la siguiente imagen:



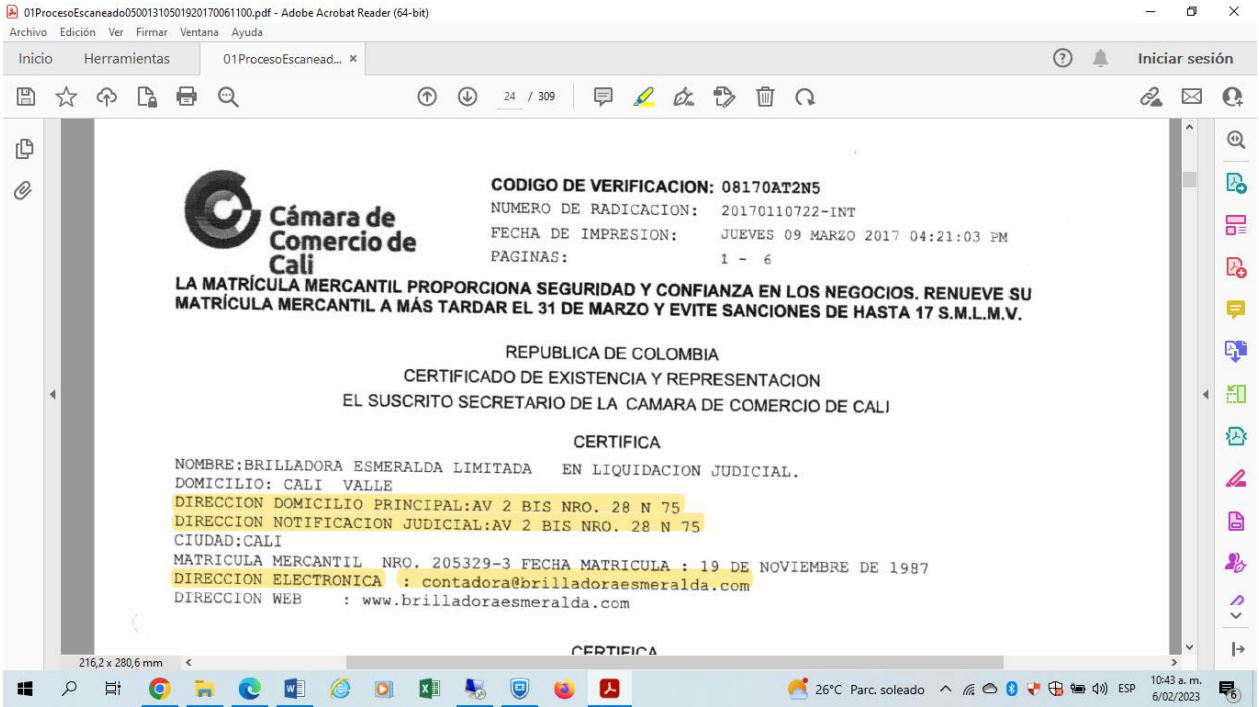


Fecha para la cual, **ya la sociedad demandada se encontraba extinta y liquidada**, como se evidencia en el Certificado de Cámara de Comercio, donde consta que por auto del **31 de octubre de 2019** se decretó la terminación de la liquidación judicial, siendo inscrita dicha actuación **el 28 de noviembre del mismo año**:



Luego, es claro que la diligencia de notificación del auto admisorio no se dio antes de la extinción por liquidación de la persona jurídica convocada, a pesar

de obrar en el certificado de existencia y representación, aportado por la propia togada la dirección de notificación judicial, Av. 2 BIS No.28-75, e incluso un correo electrónico, [contadora@brilladoraesmeralda.com](mailto:contadora@brilladoraesmeralda.com), en los cuales no se intentó la diligencia.



Y aunque como ya se dijo, en respuesta a solicitud del **09 de diciembre de 2019**, el Juzgado ordenó el emplazamiento de la codemandada en auto del **23/01/2020**, lo que reiteró en proveído del **23/08/20**, para **tales calendas Brilladora Esmeralda Ltda.**, ya había desaparecido del mundo jurídico, pues como se vio, el acta que decretó la terminación de la liquidación judicial se emitió el **31 de octubre de 2019** y se inscribió el **28 de noviembre del mismo año**, y sólo hasta el **17 de septiembre de 2021**, cuando ya era inexistente la entidad, se informó de un correo electrónico perteneciente a quien desempeñó el cargo de liquidador, quien de acuerdo a la regulación legal solo ostenta su representación hasta el momento en que se da por terminado el trámite, pues tal decisión trae como consecuencia la cancelación de la matricula mercantil y la extinción de la persona jurídica en cuyo nombre venía actuando, así las cosas el liquidador tuvo la representación de la sociedad accionada hasta el día 31 de octubre

de 2019, fecha en que concluyó el trámite liquidatorio, por lo tanto, esa persona jurídica sólo hasta esa fecha podía ser vinculada a juicio a través de dicho funcionario, pues se reitera, al terminar la existencia legal del representado, igualmente, pone fin a las funciones y facultades de la persona que fue designada como liquidador, toda vez que dicha figura jurídica tiene por finalidad representar a la deudora y ejercer las funciones previstas en el artículo 166 de la Ley 222 de 1995 C. de Co.<sup>7</sup>, sin que tampoco pueda darse aplicación a lo dispuesto en el artículo 245<sup>8</sup> del mismo estatuto, pues es de advertir que precisamente dicha disposición se encuentra ubicada en el capitulo X, que específicamente regula el tema de la liquidación del patrimonio social, es decir, la reserva a la que se hace alusión cubre aquellas obligaciones condicionales y litigiosas que se hubiesen puesto en conocimiento dentro del proceso liquidatorio, lo que aquí no aconteció; y menos aún podría darse aplicación a lo dispuesto en el artículo 68 del C.G.P., como lo pretende la recurrente, pues la norma es clara en señalar: *Si en el curso del proceso sobreviene la extinción, fusión o escisión de alguna persona jurídica **que figure como parte**, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso la sentencia producirá efectos respecto de ellos, aunque no concurran.* Es decir, para que esta disposición aplique, **la persona jurídica ya tenía que encontrarse vinculada como parte**, esto es, **debidamente notificada**, y en este caso, ello no se dio, **luego no estaba debidamente integrada en la litis**, pues como se explicó, para aquel momento ya la sociedad era inexistente, máxime que como se explicó el liquidador sólo puede representarla mientras perdure el proceso

<sup>7</sup> En Sentencia de 23 de junio de 2015, Exp. 20688, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, SEque "la sociedad desaparece como sujeto de derecho [...] hasta ese momento el liquidador tiene capacidad para representarla legalmente".

<sup>8</sup> **ARTÍCULO 245. <RESERVA EN PODER DE LOS LIQUIDADORES PARA ATENDER OBLIGACIONES CONDICIONALES O EN LITIGIO>.** Cuando haya obligaciones condicionales se hará una reserva adecuada en poder de los liquidadores para atender dichas obligaciones si llegaren a hacerse exigibles, la que se distribuirá entre los asociados en caso contrario. La misma regla se aplicará en caso de obligaciones litigiosas, mientras termina el juicio respectivo.

En estos casos no se suspenderá la liquidación, sino que continuará en cuanto a los demás activos y pasivos. Terminada la liquidación sin que se haya hecho exigible la obligación condicional o litigiosa, la reserva se depositará en un establecimiento bancario.

liquidatorio, y sus socios individualmente considerados, tampoco fueron vinculados al antes de la extinción de la entidad. Con fundamento en lo dicho, se impone confirmar la decisión revisada, sin que haya lugar a imponer costas por no haberse causado.

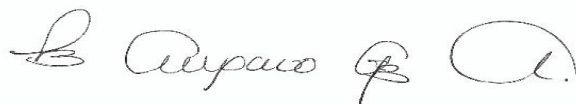
En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, CONFIRMA** el auto de fecha, naturaleza y procedencia conocidas.

**Por Secretaría** remítase el expediente digital con la presente actuación al Juzgado de origen para el trámite pertinente.

Sin costas en esta instancia. Artículo 365 – 8 del C. G. del P.

Lo resuelto se notifica a las partes por **estados virtuales**, artículo 295 C.G. del P. en concordancia con el artículo 9 de la Ley 2213 de 2022.

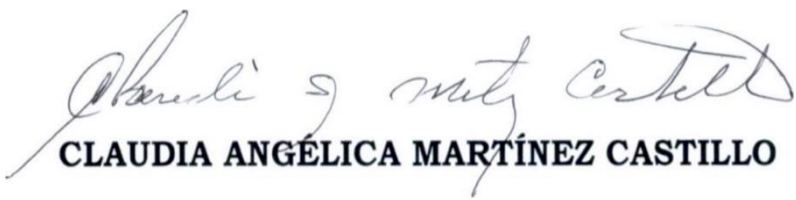
**Las magistradas, (firmas escaneadas)**



**LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL**



**MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**



**CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO**

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL  
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN –  
SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por  
estados No. 56 del 31 de marzo de 2023

**consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>